



OPINIÓN


 POR PABLO
 CABANAS DÍAZ

electoral de 2025 pertenece a esa vieja tradición mexicana en la que el discurso oficial construye escenarios luminosos, mientras la política verdadera transcurre en espacios donde casi nunca entra la luz.

Se organizaron foros en distintos estados, se habilitó un micrositio que presume miles de visitas y se realizaron sesiones públicas con la promesa de escuchar todas las voces. Sin embargo, la historia nacional enseña una constante: la participación ciudadana se exhibe en la superficie, pero las decisiones de fondo se toman en las cámaras subterráneas del poder, donde la transparencia se vuelve un decorado más.

México conoce bien estos rituales. Se convoca al ciudadano para celebrar la democracia, pero el porvenir se redacta en mesas cerradas entre actores que se reconocen indispensables y, al mismo tiempo, recelan profundamente entre sí. La consulta abierta y la negociación silenciosa conviven como dos planos de una misma obra. La modernidad se anuncia, pero las inercias permanecen. Y es precisamente en esa frontera –entre la luz del escenario y la sombra del taller donde se forja la ley– donde empieza la verdadera historia de esta reforma electoral.

Las audiencias públicas que concluyeron a finales de año no solo buscan delinear un nuevo sistema electoral; pretenden también redefinir el equilibrio interno del bloque gobernante. Detrás de los diez ejes temáticos –libertades, representación, partidos, financiamiento, votación, comunicación política, autoridades, justicia electoral, elegibilidad y democracia participativa– se libra una pugna en la que cada actor protege su territorio. En enero de 2026, la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral consolidará las propuestas. Su producto final será menos un reflejo de la ciudadanía que una síntesis negociada entre partidos que se necesitan y, a la vez, se temen.

Creada por decreto el 4 de agosto de 2025, la Comisión pretende convocar al pueblo para expresar su visión del futuro democrático de

La arquitectura invisible del poder

Hay reformas que nacen envueltas en el lenguaje de la modernización, como si el simple anuncio de su existencia bastara para inaugurar una nueva era democrática. La reforma

México. En el papel, su mandato se inscribe en la tradición republicana de ampliar la voz pública. En la práctica, opera bajo la tutela directa de la Presidencia, recordando los tiempos en los que las consultas, por amplias que fueran, terminaban subordinadas a la voluntad del Ejecutivo. En la política mexicana, escuchar no obliga; consultar no compromete; dialogar no equivale a ceder.

En este escenario se desplaza la coalición gobernante –Morena, PVEM y PT– cuya cohesión es más un acuerdo táctico que una convicción ideológica. La presidenta Claudia Sheinbaum intervino recientemente para evitar que las tensiones escaparan al control institucional. No fue un gesto conciliador, sino un acto de preservación: cualquier fractura en 2025 puede convertirse en una amenaza de gobernabilidad en 2027, cuando la sucesión legislativa vuelve a tensar las costuras de la alianza. El equilibrio interno es frágil: todos se necesitan, aunque nadie confie plenamente en los otros.

La iniciativa de reforma impulsada por Pablo Gómez ha encendido el conflicto. Bajo el

Sin embargo, la historia nacional enseña una constante: la participación ciudadana se exhibe en la superficie, pero las decisiones de fondo se toman en las cámaras subterráneas del poder, donde la transparencia se vuelve un decorado más.

discurso de sanear la vida pública, propone eliminar plurinominales y reducir el financiamiento partidista. El PVEM y el PT lo han entendido bien: cualquier reforma que disminuya su capacidad de negociación nacional pone en riesgo su supervivencia política. Por ello advierten que, si no se modifica la propuesta, la alianza podría romperse. No se trata de principios, sino

de intereses: en México, los principios son ornamentos y los intereses constituyen el esqueleto de la política.

A estas tensiones nacionales se suman las disputas territoriales. En varios estados, la distribución de candidaturas se ha convertido en un campo de batalla silencioso. Los aliados observan con inquietud la regla antinepotismo impulsada por la Presidencia: lo que se presenta como una medida ética desmonta redes locales que han sostenido estructuras partidistas durante décadas.

El Verde aspira a competir solo en una franja amplia del país para aumentar su margen de negociación; el PT exige una alianza total para evitar repetir derrotas; Morena intenta administrar concesiones sin debilitar su centro. Cada movimiento es una operación quirúrgica que debe evitar la hemorragia interna. Pero el riesgo mayor no está en la disputa entre aliados, sino en que el país normalice reformas concebidas para administrar tensiones y no para renovar instituciones.